EXP: 00-000549-0163-CA

RES: 000519-F-2005

SALA PRIMERA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA . San José a las dieciséis horas diez minutos del veinte de julio del dos mil cinco.

Proceso de Ejecución de Sentencia establecido en el Juzgado Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda por **ORLANDO CALVO CALVO** , doctor en microbiología y química clínica, contra la “ **CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL** ”, representada por su apoderada general judicial sin limitación de suma, señora Gloria Martina Monge Fonseca. Figuran como apoderados especiales judiciales del ejecutante, los licenciados Javier Francisco Aguilar Villa y José Antonio Gómez Cortés. Las personas físicas son mayores de edad, casados, vecinos de San José y con la salvedad hecha abogados.

RESULTANDO

1°.- La sentencia firme de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia , N° 8478-97, dictada a las 9 horas 57 minutos del 12 de diciembre de 1997, en el recurso de amparo interpuesto por Orlando Calvo Calvo contra la Caja Costarricense de Seguro Social, **dispuso:** “Se declara con lugar el recurso y se ordena a la Caja Costarricense de Seguro Social reconocer al recurrente el título de Doctor en Microbiología y Química Clínica para efectos del cálculo del incentivo de carrera profesional. Se condena a la Caja Costarricense de Seguro Social al pago de las costas, los daños y perjuicios causados, los que se liquidarán en ejecución de sentencia de lo contencioso administrativo.”

2°.- En lo conducente, el ejecutante en su escrito de presentación estimó la acción en la suma de treinta y dos millones de colones, para que se liquiden las siguientes partidas: 1) diferencias salariales adeudadas por concepto de incentivos profesionales no reconocidos entre 1988 y hasta el segundo semestre de 1998, por ¢7.754.745,60; 2) intereses sobre la suma anteriormente indicada, el monto de ¢7.666.116,38; 3) diferencias en el pago de aguinaldo al no reconocer entre 1988 y el segundo semestre de 1998 incentivos profesionales, ¢625.586,35; 4) intereses sobre el monto recién referido un total de ¢594.355,00; 5) costas personales y procesales del recurso de amparo ¢250.000,00; y, 6) daño moral, ¢10.000.000,00. Solicitó cancelar el monto correspondiente a la indexación sobre las sumas adeudadas, de acuerdo con la pérdida del valor adquisitivo del colón.

3°.- Conferida la audiencia de rigor sobre las pretensiones del ejecutante, la apoderada general judicial de la Caja Costarricense de Seguro Social se opuso a las mismas e interpuso las excepciones de falta de derecho y la genérica de sine actione agit.

4°.- La Jueza, Ileana Isabel Sánchez Navarro, en sentencia N° 879-2002, de las 15 horas del 30 de agosto del 2002, **resolvió:** “Se declara parcialmente con lugar la presente demanda de ejecución de sentencia, de Orlando Calvo Calvo contra la Caja Costarricense de Seguro Social, entendiéndose denegada en lo no dicho expresamente. Se condena a la Caja Costarricense de Seguro Social a pagarle al actor: 1).- La suma de

un millón ocho mil quinientos setenta y seis colones por concepto de diferencias en los puntos reconocidos por la Institución demandada desde enero de mil novecientos ochenta y ocho, y aquellos que, de conformidad con la sentencia que se ejecuta, debieron reconocerse. 2).- La suma de ochenta y cuatro mil noventa y ocho colones por concepto de diferencias en el pago de los aguinaldos. 3).- Se condena a la Institución demandada al pago de los intereses legales desde la fecha en que cada pago debió hacerse, y hasta su efectivo pago. 4).- Se condena al demandado al pago de treinta mil colones por concepto de costas del recurso de amparo. 5).- Se condena a la parte demandada al pago de cien mil colones por concepto de daño moral. Se rechazan las excepciones de falta de derecho y la genérica de sine actione agit opuestas por la Institución demandada.- Son ambas costas a cargo del demandado.” (sic)

5°.- El ejecutante apeló y el Tribunal Contencioso Administrativo, Sección Primera, integrada por los Jueces, Horacio González Quiroga, Elvia Elena Vargas Rodríguez y José Joaquín Villalobos Soto, en sentencia N° 75-2004 de las 14 horas del 3 de marzo del 2004, **dispuso:** “Se modifica el fallo apelado, se concede en concepto de daño moral, la cantidad de quinientos mil colones. En lo demás, por las razones dichas, se confirma.”

6°.- El licenciado Aguilar Villa, en su expresado carácter, formula recurso de casación por el fondo. Alega violación de los artículos 162, 163 y 704 del Código Procesal Civil.

7°.- En los procedimientos se han observado las prescripciones legales.

Redacta el Magistrado González Camacho

CONSIDERANDO

I.- En el mes de julio de 1977 el recurrente finalizó sus estudios superiores de la carrera de Microbiología y Química Clínica, no obstante, hasta el 25 de noviembre del 1981 obtiene el grado de Doctor en Microbiología y Química Clínica. Mediante el Decreto Ejecutivo No. 18960-H de 27 de abril del 1989 se dispuso que los puntos de carrera profesional por el título académico de doctor eran 40 y por la especialidad 26. El ejecutante presentó solicitud para que se le reconocieran los puntos adicionales en la carrera profesional, pues ya ostentaba el grado académico de doctor, en razón de que al amparo de las normas sobre el reconocimiento y equiparación de grados y títulos emitidas por el Consejo Nacional de Rectores, ya había culminado su plan de estudios para la carrera de Microbiología y Química Clínica, petición que fue rechazada mediante oficio DAS-082-92 del 23 de marzo de 1992 del Departamento de Administración de Salarios de la CCSS. El recurrente formuló recurso de amparo ante la Sala Constitucional, gestión que se tramitó bajo el expediente número 97-006343-007-CO, y en el cual se emitió la resolución No. 8478-97 de las 9 horas 57 minutos del 12 de diciembre de 1997, misma que declaró con lugar el recurso planteado y ordenó a la CCSS reconocer al amparado el título de Doctor en Microbiología y Química Clínica para efectos del cálculo de incentivo de carrera profesional. Así mismo, dispuso la condenatoria a la CCSS al pago de las costas, daños y perjuicios causados, que se liquidarían en ejecución de sentencia.

II.- En el proceso de ejecución de sentencia, el ejecutante solicita el pago de: 1) diferencias salariales adeudadas por concepto de incentivos profesionales no reconocidos entre 1988 y hasta el segundo semestre de 1998, por ₡7.754.745,60;

2) intereses sobre la suma anteriormente indicada, el monto de ¢7.666.116,38; 3) diferencias en el pago de aguinaldo al no reconocer entre 1988 y el segundo semestre de 1998 incentivos profesionales, ¢625.586,35; 4) intereses sobre el monto recién referido un total de ¢594.355,00; 5) costas personales y procesales del recurso de amparo, ¢250.000,00; y, 6) daño moral, ¢10.000.000,00. Solicitó cancelar el monto correspondiente a la indexación sobre la sumas adeudadas, de acuerdo con la pérdida del valor adquisitivo del colón. La ejecutada se opuso a todos los extremos liquidados e interpuso las excepciones de falta de derecho y la expresión genérica de *sine actione agit* . El Juzgado rechazó las excepciones opuestas, acogió parcialmente la demanda de ejecución de sentencia y fijó los siguientes montos :1) ¢1.008.576,00 por las diferencias entre puntos reconocidos por la institución demandada desde enero de 1988 y aquellos que debieron reconocerse al amparo del voto 8478-97 de la Sala Constitucional; 2) ¢84.098,00 por las diferencias de aguinaldos; 3) intereses legales desde la fecha en que cada pago debió hacerse, y hasta su efectivo pago; 4) ¢30.000,00 correspondientes a las costas del recurso de amparo; 5) ¢100.000,00 por daño moral. De igual modo, impuso ambas costas a cargo del demandado. El ejecutante apeló. Conociendo la impugnación formulada, el Tribunal Contencioso Administrativo, Sección Primera modificó el fallo del *a quo* , únicamente en lo que se refiere al daño moral, otorgando un total de ¢500.000.00.

III .- El ejecutante formula recurso de casación por razones de fondo. Reputa conculcados los artículos 162, 163 y 704 del Código Procesal Civil. Como **primer** agravio, aduce violación a la cosa juzgada, por cuanto el fallo recurrido, deniega y rechaza incluir y considerar dentro del salario, las partidas relacionadas a horas extras, dedicación exclusiva, antigüedad, recargo nocturno, días feriados y salario escolar, para el cálculo del plus salarial de carrera profesional, para efectos de calcular y conceder los extremos peticionados en la demanda principal y mencionados en el considerando II anterior. A su parecer, la petitoria de la ejecución debe ceñirse en su totalidad al "Por tanto" del fallo que le sirve de base, no obstante, la resolución recurrida, en una arbitraria definición de salario y en irrespeto a la cosa juzgada rechaza estos componentes solicitados. Indica que las partidas que el Tribunal sentenciador refuta como no liquidadas, son parte de su salario, por lo que al concluir que las mismas no fueron pretendidas ni liquidadas, sino incluidas en el peritaje y luego reclamadas en la apelación, proveyó en contra de lo ejecutoriado y a la vez implica un rechazo del resarcimiento de daños ocasionados. Arguye que tal denegación resulta injustificada, si se considera que en memorial del 27 de septiembre del 2000 visible al folio 56 del expediente, se detalló al Juzgado los conceptos que se toman en cuenta para el cálculo de la carrera profesional, y que en autos existe como prueba un peritaje que determina con claridad las sumas adeudadas. Cita en su apoyo doctrina y jurisprudencia de la Sala Segunda sobre las partidas que están comprendidas en el concepto de salario y que se toman en cuenta para el cálculo de vacaciones, aguinaldo, preaviso cesantía, cargas sociales e impuesto sobre la renta y luego de un desglose de los conceptos del salario del ejecutante, concluye en que el valor económico de la carrera profesional, afecta. Como **segundo** agravio, indica que se conculca la cosa juzgada al denegar la indexación pedida a efectos de traer a valor presente las sumas adeudadas por la CCSS por los conceptos de previo señalados, en razón de que al condenarse al pago de daños y perjuicios, dentro de los mismos se comprende dicho ajuste de la remuneración que no recibió en su momento debido.

IV.- De previo a analizar los agravios presentados, es de rigor realizar algunas precisiones de importancia para esos efectos. Esta Sala ha establecido de forma reiterada, que en ejecución de sentencia, la casación actúa, no como guardián de la legalidad, sino de la cosa juzgada. Su competencia no la determina la violación de leyes procesales o de fondo, tal y como sucede en el recurso de casación propiamente dicho

(artículo 593 del Código Procesal Civil), sino el quebranto de la santidad de la cosa juzgada (artículo 704 ibídem). Por lo tanto, el recurso procede sólo en el supuesto cuando las resoluciones impugnadas hayan resuelto puntos sustanciales no controvertidos en el pleito ni decididos en la sentencia en ejecución o, cuando se ha proveído en contra de lo ejecutoriado. Tocante al tema de la labor en casación cuando se recurren fallos dictados en procesos de ejecución de sentencia, en el Voto No. 74 de 15 horas 20 minutos del 17 de noviembre de 1993 esta Sala resolvió: " *IV.- Contra los fallos de los Tribunales Superiores, dictados en las (sic) diligencias de ejecución de una sentencia en proceso ordinario o abreviado, u otros que produzcan cosa juzgada, siempre que exceda de la cuantía fijada por la Corte Plena y que no se trate de la ejecución en asuntos inestimables, establece el artículo 704 del Código Procesal Civil, sólo se dará el recurso de casación, cuando se han resuelto puntos sustanciales no controvertidos en el pleito, ni decididos en la sentencia, o cuando se provea en contradicción a lo ejecutoriado. En estos casos, la función de la Sala de Casación se limita, a ser un contralor de la cosa juzgada, es decir, le corresponde impedir que los jueces de instancia alteren de alguna manera o interpreten en forma arbitraria las disposiciones del fallo a ejecutar. Por ello, en su labor fiscalizadora, la Sala debe mediante un cotejo objetivo, dejar patente si existe oposición o no entre la sentencia que se pretende ejecutar y lo dispuesto por el fallo recurrido, para que el órgano jurisdiccional executor no infrinja la normativa que le obliga a acatar los pronunciamientos judiciales firmes. V.- Cabe preguntarse, entonces, qué se entiende por puntos sustanciales y qué por resolver en contra de lo ejecutoriado. Ya a ese respecto la antigua Sala de Casación, en la sentencia N 7, de las 15:30 horas del 15 de enero de 1970, de la que forma parte el considerando que se transcribe, explicó, con relación a ese canon, que correspondía al artículo 1.019 del Código de Procedimientos Civiles anterior: "... si el fallo principal deja para una etapa posterior la liquidación de partidas de daños y perjuicios, frutos, cuentas y otros extremos de carácter análogo, es lógico que en esa etapa tengan que discutirse cuestiones que no fueron resueltas en la sentencia, pues de lo contrario nada habría que liquidar y la ejecución se concretaría al embargo de bienes. Pero es obvio que esas cuestiones no pueden ser las que menciona el artículo 1.019 al referirse a "puntos sustanciales no controvertidos en el pleito ni decididos en la sentencia", pues cuanto más se trataría de puntos nuevos, no así de puntos sustanciales; nuevos en cuanto han tenido que plantearse en ejecución de sentencia para que allí se decidan, pero no sustanciales porque lo sustancial es el pronunciamiento que dispone rendir cuentas, devolver frutos o indemnizar daños y perjuicios, y porque esos puntos nuevos no alteran la esencia de lo ejecutoriado sino que se dirigen simplemente a cumplir el fallo dentro de los límites de la condena. Con lo dicho es fácil entender que "puntos sustanciales" son aquellos que vulneran la cosa juzgada, en una forma u otra, como ocurriría -por ejemplo- si los juzgadores, en vez de ejecutar la sentencia, declaran una prescripción que el demandado debió oponer antes del fallo. Menos posibilidad de error existe en lo que mira al otro concepto del artículo 1.019, o sea el de "proveer en contradicción con lo ejecutoriado", pues con ello se alude a los pronunciamientos que están en pugna con la sentencia, ya sea que denieguen del todo la ejecución o concedan cosa distinta de lo que el fallo resuelve, o pequen por exceso o defecto, cual sería, en esta última hipótesis, si no obstante haber ordenado un fallo que se paguen rentas, frutos o intereses por un período de cinco años, en la ejecución se aprobaran partidas por más tiempo o por menos ". (Para ilustración adicional de tal criterio jurisprudencial pueden consultarse de esta Sala el voto No. 3 de las 14 horas 50 minutos del 17 de enero de 1996 y el No. 14 de las 15 horas 30 minutos del 26 de febrero de 1997).*

V.- Por otra parte, según se desprende del numeral 51 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, toda resolución que acoja el recurso de amparo o de habeas corpus, implica la condenatoria a la indemnización de los daños y perjuicios causados y al pago de las costas del recurso. Esta condena, que es en abstracto, debe ser liquidada en el proceso de ejecución de sentencia y abre la competencia de la Jurisdicción Contenciosa Administrativa, pero no prejuzga respecto de la existencia real de daños y perjuicios. En este sentido, la Sala Constitucional en sus fallos, se limita a determinar si las conductas o funcionamiento de los agentes u oficinas públicas, han quebrantado el régimen de los derechos fundamentales que se tutela en esa sede, pero sus fallos no tiene el alcance de establecer si tal acción u omisión ha generado una lesión de carácter patrimonial en la esfera jurídica subjetiva del recurrente. Ese Tribunal, al dictar este tipo de sentencias, se limita a establecer si hubo o no quebranto al orden constitucional, con la conducta acusada. En el procedimiento se da audiencia a la recurrida y ésta informa sobre la infracción reclamada. Con base en los autos dicta su pronunciamiento. Por eso, es distinto al de una sentencia dictada en un proceso de cognición. En la parte considerativa se procede al análisis de derecho. Si determina que existió lesión a los derechos fundamentales del amparado o recurrente, declara con lugar el recurso, condenando al pago abstracto de daños y perjuicios, así como las costas del proceso. En armonía con lo indicado, los daños y perjuicios que se deriven de sentencias dictadas en sede constitucional, deben ser sometidas a un proceso de ejecución de sentencia, acorde a las regulaciones procesales definidas por el Código Procesal Civil, según remisión expresa realizada por los numerales 76 y 103, ambos de la Ley de la Jurisdicción Contenciosa Administrativa, en relación con el ordinal 693 del código de rito. Sobre las particularidades de este proceso de ejecución en este supuesto específico, esta Sala ha precisado en la resolución 1243-F-01 de las 15 horas 50 minutos del 19 de diciembre del 2001: *“IV.- .. Su ejecución, por mandato de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Constitucional, corresponde a la jurisdicción contencioso administrativa. Por su naturaleza, puede decirse que se trata de una ejecución sui generis, tal y como lo ha establecido esta Sala al señalar que: “Al ejecutar los daños y perjuicios el amparado deberá necesariamente establecer los presupuestos de hecho conducentes a evidenciar una relación de causalidad entre los daños y perjuicios declarados en abstracto y el caso concreto. No basta, como en el de cognición, con la sola liquidación y valoración. El nexo de causalidad entre los daños y perjuicios condenados deben guardar íntima relación con los acusados. También deben ser reales y naturalmente requerirán de las pruebas pues, como hechos a probar, no basta con la sola afirmación de su existencia. Los tribunales de instancia deberán necesariamente evacuar las probanzas ofrecidas y en las sentencias se deben elencar los hechos probados y no probados en relación con la causalidad de daños y perjuicios, y, con base en criterios de equidad y legalidad, determinar la existencia o no de lo reclamado, y establecer la condenatoria en concreto. En tal sentido las sentencias deberán aplicar las normas de fondo referidas a los daños y perjuicios, y lógicamente deberán apreciar la prueba en los términos establecidos en el Código Procesal Civil. Ha dicho también, que “Corresponde a los jueces encargados de la liquidación determinar si los daños reclamados fueron causados por los hechos con base en los cuales la Sala Constitucional dictó la sentencia ejecutada. Por ello, al conocer de recursos en procesos de liquidación de esos daños y perjuicios, esta Sala se ha ocupado en otras oportunidades de analizar si aquello reclamado por el ejecutante puede estimarse comprendido en lo resuelto en sede Constitucional (entre muchas sentencias pueden verse la No. 112 de las 14 horas 15 minutos del 15 de julio de 1992; No. 14 de las 16 horas del 2 de marzo; No. 41 de las 15 horas del 18 de junio; No. 65 de las 14 horas del 1 de octubre, todas las*

anteriores de 1993; No. 100 de las 16 horas 10 minutos del 9 de noviembre; No. 116 de las 14 horas del 16 de diciembre, ambas de 1994; No. 45 de las 14 horas 45 minutos del 25 de abril y No. 99 de las 16 horas del 20 de setiembre; las dos últimas de 1995).”

VI.- En este sentido, los daños y perjuicios derivados de la declaratoria de dicha Sala, deberán ser demostrados en un proceso de ejecución de sentencia, en el cual, las instancias competentes deberán valorar y ponderar los argumentos de fondo y elementos de prueba aportados, a efecto de determinar la existencia real de un daño y/o perjuicio, asociado al incumplimiento constitucional que dio base a la declaratoria con lugar del proceso de amparo, así como su correspondiente *cuantum*. Es decir, es preciso acreditar una relación de causalidad o conexidad entre los daños y perjuicios condenados, y los pretendidos. De ello se infiere que en estos casos, no basta la simple presentación de una liquidación y valoración de estos extremos, pues antes bien, debe demostrarse que efectivamente, aquel funcionamiento administrativo generó por efecto directo, un daño o perjuicio que deba ser resarcido. Y mas aún, que el daño reclamado sea consecuencia de aquella acción u omisión que motivó el proceso de amparo o habeas corpus. Es evidente entonces que deben ser reales y por ende, requerirán de la demostración pertinente. Por su parte, el numeral 317 del mismo cuerpo legal impone a la parte ejecutante el deber de comprobar los montos pretendidos. El artículo 693 del Código Procesal Civil regula la condenatoria de daños y perjuicios en abstracto, y establece la necesidad de que el victorioso aporte una liquidación concreta y detallada, indicando montos y sujetándose a las bases dadas en la sentencia y presentando las respectivas pruebas. En este sentido puede observarse la sentencia No. 774 de las 14 horas 20 minutos del 20 de noviembre del 2003 en la cual se indicó por parte de esta Sala: “ *Es claro, que en los procesos en los cuales se cobran daños y perjuicios que una persona ocasionare a otra, es absolutamente necesario, se demuestre efectivamente que los mismos se han ocasionado, pues debe acreditarse la existencia del daño o del perjuicio, así como que la parte demandada es la responsable de éstos, sea, el nexo causal. La carga de la prueba, corresponde a la parte que promueve la acción, situación que establece en forma concreta el inciso primero del artículo 317 del Código Procesal Civil. Quiere decir, que no basta con alegarlos, sino que deben ser demostrados en forma idónea y fehaciente, para que puedan ser concedidos.* ” Es decir, la liquidación en sí misma no basta para acceder a las pretensiones formuladas, sino que deben justificarse y demostrarse mediante los mecanismos de prueba pertinentes.

VII.- El presente recurso se plantea por haberse resuelto en contra de lo ejecutoriado en la resolución dictada por la Sala Constitucional y por ende en contravención de la santidad de la cosa juzgada. El fallo que se ejecuta además de ordenar el inmediato reconocimiento del grado de doctor en Microbiología y Química Clínica para efectos del respectivo reconocimiento en el incentivo de carrera profesional, condena en abstracto al pago de daños y perjuicios causados y costas. El recurrente centra su reclamo, en cuanto al primer reparo, en el aspecto de que el concepto de salario incluye por regla directa, los demás beneficios inherentes al desarrollo de sus funciones, por lo que al no habersele reconocido, se quebranta lo ejecutoriado. Al respecto deben realizarse las siguientes consideraciones. En el fondo, los motivos aportados, aún cuando acusan violación a la santidad de la cosa juzgada, pretenden combatir la omisión de pronunciamiento en que incurrieron las instancias previas con relación a las sumas reclamadas. Este alegato se asocia y es propio, de un vicio de incongruencia del fallo de ejecución, por cuanto estima que el Tribunal debió haberse manifestado sobre esos extremos, lo que en sí mismo no es un aspecto

vinculado a la cosa juzgada de la sentencia vertida en el recurso de amparo. Se trata entonces de un reparo que combate el incumplimiento del deber del juzgador de referirse a todas las pretensiones aportadas por las partes. Ya se ha indicado con antelación que en procesos de ejecución de sentencia la casación funge como guardián de la santidad de la cosa juzgada, por lo que el recurso procede únicamente cuando las resoluciones impugnadas, han resuelto puntos sustanciales no controvertidos en el pleito ni decididos en la sentencia en ejecución o, cuando se ha proveído en contra de lo ejecutoriado. Bajo esta inteligencia, los vicios acusados recriminan incongruencia en el fallo de ejecución, ergo, no se relacionan de forma directa no puede asociarse a un quebranto a la cosa juzgada, por ende, no son pasibles de ser revisados en casación, ante lo cual, deben ser rechazados. Sin perjuicio de lo anterior, aún cuando el casacionista quiera hacer ver esa omisión como una denegación de los daños y perjuicios a que tiene derecho, no estima este órgano colegiado que la resolución del *ad quem* presente el vicio alegado. En efecto, el concepto de salario que ha aportado la doctrina especializada en materia laboral, así como la densa jurisprudencia emitida por la jurisdicción de trabajo, permite inferir que está integrado no solamente por la base salarial, sino además por el resto de incentivos reconocidos a favor del trabajador o funcionario, como contraprestación por su esfuerzo y aporte de funciones, sean estos otorgados en dinerario o en especie. Desde este plano, pasan a formar parte de los derechos del trabajador o funcionario, constituyéndose por ende en una obligación a cargo del patrono. En este sentido, el concepto de salario incluye todos aquellos pluses que incrementan la remuneración, que bajo la periodicidad pertinente que se haya convenido, debe otorgarse a favor del trabajador o funcionario. No obstante lo anterior, acorde a lo que dispone el numeral 693 del Código Procesal Civil, en los procesos de ejecución de sentencias que condenen en abstracto a pagar daños y perjuicios, el actor deberá presentar el desglose concreto y detallado con referencia de los montos respectivos. En la especie, esta norma, de consuno con el artículo 317 *ibidem*, impone el deber del recurrente de aportar el detalle concreto de las partidas que estima forman parte de los derechos que se desprenden de la declaratoria de la Sala Constitucional y que guardan un ligamen de causalidad con el hecho dañoso acusado. La convergencia de las anteriores normas jurídicas aplicadas al caso concreto llevan a determinar, que si bien los aspectos no considerados por la sentencia recurrida (horas extras, dedicación exclusiva, antigüedad, recargo nocturno, días feriados y salario escolar) pueden llegar a formar parte del salario como un todo (en la medida que se produzcan los presupuestos necesarios para su reconocimiento dentro de la relación laboral o estatutaria), ello no releva al demandante de la carga de formular su reclamo con la claridad y detalle que las condiciones exigen. En efecto, los elementos que pretende sean reconocidos dentro del cálculo de los daños provocados por el no reconocimiento del título *supra* indicado y por ende en la carrera profesional, son elementos que por su especificidad, debieron haber sido objeto de detalle en la liquidación aportada, acompañando la cuantía pretendida por el ajuste debido por estos conceptos, presupuesto que hubiera permitido al juzgador contar con elementos más objetivos que le facilitaran analizar la procedencia del citado ajuste en las proporciones pretendidas por el ejecutante. Ello es de esta manera, pues tal detalle es elemental para determinar el grado de incidencia o nivel de conexidad que el fallo dictado por la Sala Constitucional tuvo en dichos componentes salariales y así definir si su denegatoria atenta contra lo ejecutoriado. En este sentido, el recurrente aporta una fórmula que permite establecer como se calcula su salario (folios 407 y 408). De la misma se desprende que para determinar las incidencias de la condenatoria en abstracto sobre estos rubros, se requería de una liquidación detallada. Lo anterior por cuanto el nivel de complejidad de dicha fórmula, exige un cálculo

específico por cada partida, (ya que no todas se ven afectadas de la misma manera por los puntos que asignan por concepto carrera profesional), para posteriormente, haber totalizado las diferencias en el salario como un concepto integral. Empero, al no haberse aportado tal detalle, ese cálculo no es factible de ser realizado y por ende tales partidas deben tenerse por no liquidadas acorde al citado numeral 693 del Código Procesal Civil.

VIII.- Esta Sala ha indicado de forma reiterada que en procesos como el presente, no basta, como en el de cognición, con un simple aporte del detalle que se pretende, lo cual se sustenta en la diferencia que este tipo de proceso guarda respecto al discutido, diferencias ya objeto de análisis en los apartes anteriores y que aportan la exigencia de que los daños y perjuicios no solamente sean liquidados, sino que además deben demostrarse y asociarse con la causa que en teoría los soporta. También deben ser reales y naturalmente requerirán de los elementos probatorios que los demuestren pues, como hechos a probar, no basta con la sola afirmación de su existencia. La sentencia de la Sala Constitucional ordenó el reconocimiento del título de doctor para efectos del ajuste respectivo en la carrera profesional, razón por la cual, cualquier daño o perjuicio requerido ha de guardar una íntima relación con esta causa, es decir, las pretensiones formuladas por el ejecutante en el proceso de ejecución de sentencia deben tener una directa conexidad con los daños y perjuicios realmente ocasionados a partir del hecho que motivó la sentencia condenatoria en sede constitucional. Desde esta arista de análisis, cualquier extremo al que pretenda acceder el recurrente, debe tener relación con el no reconocimiento del citado título y el pago de la diferencia de los puntos que el mismo otorga a nivel del elemento salarial de la carrera profesional, razón por la cual, la liquidación del actor debía aportar un detalle de los extremos reclamados para detectar si correspondía o no su reconocimiento. El fallo de la Sala Constitucional implica el ajuste a la carrera profesional ante el reconocimiento del título académico referido *ut supra*, por lo que, si el recurrente estimaba que otras partidas del salario se afectaban a partir del incremento de la carrera profesional, debió haber aportado detalle de las partidas específicas que se debían también ajustar y en que cuantía, lo cual no se presentó en la liquidación inicial, omisión que pretende cubrir con la consideración de que el concepto de salario incluye aquellos extremos. Tal desgloce es de rigor, por un lado, para que la parte contraria pueda ejercer un correcto derecho de defensa y contradictorio, aportando al expediente los argumentos y pruebas que estime pertinentes para demostrar la inexistencia de la requerida conexidad, o bien, la improcedencia del pago del alegado daño, por no existir, o por no ser de la cuantía reclamada. Lo anterior en virtud de que el simple hecho de haber sido condenada por violación al régimen de los derechos fundamentales, no implica de forma automática, que los daños y perjuicios reclamados sean procedentes en la dimensión que exige, o bien, que se hayan producido, aspectos que según se analizó de previo, deben ser objeto de valoración y definición en un juicio de conocimiento propio de los alcances y requerimientos que se desprenden para este tipo de procesos. Por otro lado, esta forma de liquidación permite al juzgador, con un mayor grado de facilidad, constatar la conexidad entre el daño reclamado y los definidos por la sentencia de la Sala Constitucional, así como el nivel de incidencia tanto cualitativa como cuantitativa en la esfera jurídica particular del recurrente, proyección que se extraña en la presente y que impiden al juez ingresar en este ejercicio deliberativo. Ahora bien, aún cuando los informes rendidos por el perito designado al efecto, Licenciado Víctor R. Vargas Brenes (visibles a los folios 97 y 266), hayan realizado una cuantificación de estos extremos no reconocidos, esta inclusión no dispensa al recurrente de haber aportado la respectiva liquidación de forma concreta y detallada, en los términos del numeral 693 del Código de rito. Esto dado que dicho

informe no posee la virtud de superar la omisión de la parte promovente en su pretensión liquidatoria, más aún al considerar que la CCSS se opuso a ambos dictámenes rendidos que no vinculan al juzgador sobre su contenido. De este modo, dentro del contexto del numeral 330 del Código Procesal Civil, puede apartarse de este tipo de informes, cuando por la valoración de la prueba en su conjunto o por aspectos de sana crítica, así sea necesario. (Sobre el particular véase sentencia de esta Sala No. 107 de las 14 horas 30 minutos del 10 de julio de 1992). La resolución dictada por el Tribunal, en el considerando III establece la causa principal que motiva la decisión adoptada, a saber: “ *De conformidad con el numeral 693 del Código Procesal Civil, en caso de que una sentencia condene al pago de daños y perjuicios en abstracto, el victorioso presentará la liquidación concreta y detallada, con indicación de los montos respectivos, con ofrecimiento de la prueba que corresponda . (...) No pretendió ni liquidó los extremos que en alzada pide ..., los que fueron incluidos dentro del dictamen pericial del licenciado Víctor R. Vargas Brenes, pero que no tiene virtud de incluirlos en la liquidación a que está obligado el actor, razón por la cual, el Tribunal no puede variar este extremo del fallo, que por otras razones denegó el a-quo*” . Esta Sala estima que al margen del concepto y de los componentes que determinan su totalidad, en el presente caso, la falta de la liquidación clara y detallada de los extremos denegados, hace que no sean susceptibles de ser valorados como lo pretende el ejecutante. Acorde a lo indicado, las particularidades de los elementos que constituyen el salario del recurrente ameritaban de una liquidación más concreta y detallada que permitiera establecer de forma objetiva, parámetros de referencia para poder realizar un análisis de la conexidad entre lo peticionado y lo ejecutoriado. De igual forma, era imperioso el cálculo de las sumas dejadas de percibir por la conducta irregular de la CCSS, al no haberle reconocido el título de doctor en Microbiología y Química Clínica.

Siendo de esta manera, no se observa violación alguna a la santidad de la cosa juzgada, pues en la especie, la denegatoria de los extremos salariales que ahora aduce, obedece a una omisión del propio gestionante, quien en ajuste a lo dicho, no presentó la liquidación de los daños y perjuicios alegados (en lo que se refiere a los componentes sobre los cuales no hubo pronunciamiento de los jueces de instancia), en la forma que dispone el numeral 693 del Código Procesal Civil. En los procesos de ejecución de sentencia de condenatorias en abstracto, la plena satisfacción de las pretensiones del demandante depende de la real causalidad entre los daños condenados y los reclamados y su efectiva demostración. Pero además, pende de la formulación de las peticiones, así como de la forma en que el ejecutante pone a disposición del juez los elementos necesarios para secundar su pretensión. De modo que dándose deficiencias en estas, el juez por el principio de congruencia y en apego al Ordenamiento Jurídico, se ve imposibilitado de acceder a ellas, cuando no se aportan los elementos mínimos que le permitan juzgar, o bien las formulaciones de las partes no se ajustan a la técnica jurídica dispuesta para el proceso. Por tales motivos, no se ha producido la violación a la cosa juzgada que se ha alegado; y en cuanto a este reparo, debe rechazarse el recurso planteado.

IX.- En otro orden de ideas, respecto del agravio relacionado con la denegatoria de aplicación de la indexación a las sumas adeudadas conviene indicar. La jurisprudencia de esta Sala había establecido la improcedencia de la indexación extra-convencional, ante la inexistencia de una norma legal que así lo dispusiera (entre otras, véase sentencias No. 49 de las 15 horas del 19 de mayo de 1995, No. 947 de las 10 horas del 22 de diciembre del 2000 y No. 518 de las 11 horas del veintiocho de agosto del 2003) . No obstante, luego de un serio proceso de reflexión sobre el tema, en fecha reciente, en la sentencia No. 1016-F-04 de las 9

horas 30 minutos del 26 de noviembre del 2004, se estableció la procedencia de la indexación no convencional, en determinados supuestos de obligaciones donde la parte con derecho así lo haya requerido, básicamente, con sustento en la doctrina que se desprende del numeral 41 de la Constitución Política que obliga a la reparación integral de los daños. De igual forma esta Sala ha sustentado este tipo de indexación en la simple y adecuada proyección del derecho constitucional a una justicia cumplida y sin denegación, a la tutela judicial efectiva y al principio de igualdad de jerarquía constitucional. Cabe señalar que la indexación extra-convencional, procede únicamente, y tiene sentido, en las obligaciones dinerarias, no así en las de valor, porque estas últimas, acorde a lo dispuesto por la sentencia indicada, " *tienen un contenido intrínsecamente ajustable a precio o valor presente, pues esencialmente buscan la equiparación económica de un bien que no puede ser restituido in natura.* " En este sentido, la resolución referida indica: " IX.- ... *Esto permite sostener que la indexación como tal, cobra sentido esencialmente respecto de las obligaciones dinerarias, sobre las que no existe duda en su procedencia, sin exclusión, claro está, de los perjuicios correspondientes, pues ha de quedar claro que se trata de extremos diferentes e independientes.* (...) Así estará afectada a la regla general indicada, bajo parámetros de concreción de muy diversa índole, dentro de los cuales el más conveniente y razonable, está representado por el Índice de Precios al Consumidor (IPC), criterio que además de ajustable de acuerdo con diversos factores de la realidad, es establecido por la más importante entidad estatal rectora en materia financiera. " -El subrayado no es del original-.

X.- Dicho lo anterior, procede establecer el tipo de obligación que se desprende de este proceso a efectos de determinar si es procedente o no la aplicación de la figura de la indexación extra-convencional, para lo cual deberá determinarse además si la recurrente así lo solicitó en el líbello de liquidación principal. En la especie, las obligaciones que corren a favor del casacionista consisten en sumas dejadas de percibir por el no reconocimiento de los puntos de carrera profesional, propios del grado académico de doctor en la carrera de Microbiología y Química Clínica, reconocimiento que implica un adicional de 24 puntos en el pago correspondiente a este componente salarial. Las condiciones de este elemento llevan a concluir que se está frente a una obligación dineraria, puesto que los daños que afectan al recurrente consisten en las diferencias económicas entre el salario recibido y el que debió haber percibido, incluyendo los puntos de carrera profesional que procedían, mismas que se establecen en monetario y que por ende constituye una obligación dineraria, por tanto, susceptible de indexación. Adicionalmente a lo indicado, en el escrito principal de ejecución de sentencia, se observa que se petitionó sobre la indexación de las sumas adeudadas (folio 27), por lo que en cuanto a este particular, la solicitud del recurrente cumple con los presupuestos que fueron establecidos por esta Sala sobre el tema, sea, se ha pedido la indexación por parte de quien tiene derecho y se trata de una obligación dineraria. Bajo este predicado, la sentencia recurrida debe ser casada en cuanto a este punto, en virtud de que la nueva posición de esta Sala ha modificado la línea jurisprudencial sobre la cual se sustentó el *ad quem* para rechazar este extremo. Por tal motivo, debe anularse la sentencia del Tribunal, únicamente en lo que se refiere al rechazo de la indexación pretendida, y resolviendo por el fondo, se revoca parcialmente la del Juzgado en cuanto a este mismo extremo; corresponde indexar las sumas adeudadas fijadas por el juez de primera instancia y confirmadas por el Tribunal, a saber; 1) ₡1.008.576,00 por concepto de diferencias ente puntos reconocidos por la institución demandada desde enero de 1988 y aquellos que debieron reconocerse al amparo del voto 8478-97 de la Sala Constitucional; 2) ₡84.098,00 correspondientes a contrastes en las partidas de aguinaldos.

XI.- Ahora bien, contestes con la posición adoptada por este órgano colegiado respecto del tema en debate, las obligaciones dinerarias mencionadas en el aparte anterior deberán ser indexadas a favor del recurrente, acorde al índice de precios al consumidor (IPC) vigente. De conformidad con el principio de tutela

judicial efectiva y por razones de celeridad procesal, es de rigor fijar el monto de tal actualización monetaria, dentro de los parámetros referidos. A tales efectos, como mecanismo establecido para ese fin, se ha utilizando el índice de precios al consumidor acumulado correspondiente a cada período (al mes de junio de cada año), para definir la inflación acumulada, aplicada a cada monto adeudado desde el mes de enero de 1988 y hasta junio de 1998, según la siguiente fórmula: $(IPC \text{ final} / IPC \text{ inicial}) * 100 - 100 = X$, en donde X es igual a: $X = \text{MONTO} * (1 + X / 100)$. (IPC: Índice de precios al consumidor) Realizados los cálculos correspondientes, se desprenden las siguientes partidas: **a)** la suma de $\$1.008.575,93$ fijada por el Tribunal por concepto de diferencias por el no reconocimiento de los 24 puntos de carrera profesional, implica un valor monetario presente de **$\$4.268.347,19$** ; **b)** la condena de $\$84.047,99$ por los contrastes salariales en el aguinaldo, traída a valor presente asciende a **$\$355.695,60$** . En virtud de lo indicado, deberá la CCSS cancelar a favor del recurrente las sumas actualizadas referidas.

XII.- En razón de lo anterior, procede casar parcialmente el fallo recurrido, con exclusividad en lo que se refiere al rechazo de la pretensión de la indexación de las sumas adeudadas, en los términos indicados en el considerando precedente. En lo demás, se impone declarar sin lugar el presente recurso de casación.

POR TANTO

Se declara con lugar el recurso de casación planteado, únicamente en cuanto al rechazo de la petición de indexar las sumas adeudadas. En consecuencia, sobre este extremo se anula el fallo del Tribunal y se revoca el del Juzgado, en su lugar, resolviendo por el fondo, se acoge la solicitud de indexación sobre las sumas reconocidas al ejecutante, las que se fijan en **$\$4.268.347,19$** por concepto de diferencias en el pago de carrera profesional y **$\$355.695,60$** por contrastes de aguinaldos derivados de esta diferencia. En lo demás se declara sin lugar.

Anabelle León Feoli

**Luis Guillermo Rivas Loáiciga
Zelaya**

Román Solís

**Óscar Eduardo González Camacho
Fernández**

Carmenmaría Escoto

Kattia

Rec: 180-04